

BOLETIN OFICIAL.



PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.—Se suscribe en la Imprenta de D. Pedro Lozano, Calle de San Pedro núm. 14, á 80 rs. al año para esta Capital, y 96 para fuera franco de porte por trimestres adelantados.

PARTE OFICIAL.

PRIMERA SECCION.

MINISTERIOS.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

El Excmo. Sr. Mayordomo mayor de S. M. me dice con esta fecha lo siguiente:

Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Primer Médico de Cámara, á las 8 de esta mañana, me dice lo que sigue:

Excmo. Sr.: S. M. la Reina nuestra Señora ha pasado la noche con el desvelo y la inquietud propios de la dolencia, la cual no ha presentado alteracion alguna en su curso.

Lo que traslado á V. E. para su conocimiento y demas efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Palacio 22 de Enero 1857.—El Duque de Bailén.—Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros.

Por la Mayordomía mayor de S. M. se dice al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros, con fecha 22 del corriente, lo que sigue:

Excmo. Sr.: La Reina nuestra Señora ha pasado el día en un estado de calma bastante favorable. La erupcion, despues de haber llegado á su completo desarrollo, ha principiado á declinar.

La augusta Real familia de S. M. continúa sin novedad en su importante salud.

ARTICULO DE OFICIO.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

Número 52,

El Sr. Gobernador militar de esta provincia, con fecha de ayer, me espresa lo siguiente:

El Excmo. Sr. Capitan general del distrito en 25 del que rige me dice lo que copio:

El Excmo. Sr. Capitan general de

Burgos en 16 del actual me dice lo que sigue: Excmo. Señor: Hoy á la una de la tarde, en el pueblo de Estepar se me han presentado los Hierros con armas y caballos y toda su partida en número de diez hombres, implorando la clemencia de S. M. Apreciando debidamente este acto meritorio de arrepentimiento y sumision, y estimando otras consideraciones de alta importancia, los he indultado en nombre de la Reina siempre magnánima y generosa. Tengo la satisfaccion de participarlo á V. E. para su inteligencia; y por si cree conveniente dar publicidad á este hecho importante que asegura la tranquilidad en el distrito de mi mando. Lo que traslado á V. S. para su noticia, y á fin de que lo comunique al Sr. Gobernador civil de esa provincia para que se sirva publicarlo en el Boletín oficial.

Lo que tengo el honor de trasladar á V. S. para su inteligencia y fines indicados.

Y en su consecuencia se inserta en este periódico para conocimiento de los leales habitantes de la provincia de mi mando. Orense 28 de Enero de 1857.—El Gobernador, Pablo de Uria.

Número 53.

Declarada vacante la Alcaldía de la Cárcel pública de Trives conforme á lo determinado por el Ilmo. Sr. Director general de establecimientos penales con fecha 14 del corriente dotada con ochocientos rs. anuales de sueldo, pagados de fondos municipales, se llaman aspirantes que deseen obtenerla; en el concepto de que para considerarlos tales, habrán de acreditar segun lo prescrito por la Real orden de 12 de Febrero de 1850 las circunstancias siguientes:

Presentar instancia á mi autoridad en que lo soliciten dentro del término de un mes desde la publicación de este anuncio, escrita precisamente por el respectivo interesado.

Justificar la edad no menor de 35 años con la fé de bautismo; el estado

de casados con la partida de matrimonio; la moralidad, buen concepto público y el requisito de no estar procesados, con certificaciones de las autoridades de los pueblos de su residencia.

Y por último la de tener arraigo ó de responder por ellos personas que lo tengan, con documentos fehacientes al efecto.

Las solicitudes que carezcan de alguno de los requisitos ó documentos espresados no serán admitidas. Orense Enero 28 de 1857.—El Gobernador, Pablo de Uria.

Número 54.

En las Gacetas del día 10 y 11 del corriente se leen los Reales decretos siguientes:

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

Negociado 2.º

La Reina (Q. D. G.) se ha dignado expedir el Real decreto siguiente:

«En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador civil de la provincia de Pontevedra y el Juez de primera instancia de Puente Caldelas, de los cuales resulta que en Enero de 1855 se efectuó una visita en el distrito municipal de Puente Caldelas por orden del Gobernador civil de la provincia, y apareciendo de ella que no se había observado la formalidad debida en la contabilidad de los fondos generales y municipales, y que se había hecho un reparto para cobrar la contribucion de consumos sin auencia del Gobernador, resolvió esta Autoridad, en 11 del expresado mes, imponer una multa á los Concejales de aquel distrito; suspender desde luego al Alcalde y Secretario, y considerandoles como reos de estafa y de usurpacion de atribuciones, remitir el expediente de visita al Juez de primera instancia del partido para el esclarecimiento de los hechos e imposición de penas á los que aparecieren culpables:

Que el Juzgado procedió á la formacion de causa, y en ella dió auto de sobreesamiento; pero la Audiencia territorial, declarando sin efecto la providencia citada, mandó ampliar el su-

mario y sustanciar la causa con arreglo á derecho:

Que el Juez no pudo verificarlo, porque los Concejales se negasen á presentarse nuevamente á prestar declaraciones, apoyados por el Gobernador, y fundándose en que faltaba la competente autorizacion:

Que el Gobernador ofició al Juez para que remitiera el expediente original y suspendiera la causa hasta que se resolviese por la Administracion el punto de si existia ó no delito, y que hubiera la correspondiente autorizacion, advirtiéndole que el hecho de haber remitido las diligencias de visita no equivalia al cumplimiento de aquel requisito; y añadiendo que, para el caso de no acceder á sus reclamaciones, le proponia competencia:

Que el Juez la aceptó considerando que procedia dentro del círculo de sus atribuciones, y que resultó esta contienda.

Visto el párrafo segundo del art. 99 del Real decreto de 25 de Mayo de 1845, que dispone no se lleve á efecto un repartimiento en materia de consumos sin la aprobacion del Intendente:

Visto el art. 47 de la Instruccion de igual fecha, que marca la responsabilidad en que incurren los Intendentes que no reprimen los abusos cometidos en la Administracion:

Visto el art. 5.º del Real decreto de 4 de Junio de 1847 que prohíbe á los Jefes políticos suscitar contiendas de competencia en juicios criminales á no mediar cuestion previa, y que dispone igualmente que tampoco se suscitén por falta de la autorizacion para procesar á los empleados:

Considerando:

1.º Que no son bastantes ninguno de los dos motivos en que el Gobernador de Pontevedra se funda para suscitar esta contienda: el primero, porque la cuestion previa que manifiesta debe resolver la Administracion se halla decidida en 11 de Enero de 1855 por el Gobernador dentro del círculo de sus atribuciones, como Intendente; y la segunda, porque la falta de autorizacion terminante para procesar á los Concejales de Puente Caldelas podrá producir la nulidad de las actuaciones que sin ella se practiquen, sin que por tal motivo adquiera la Administracion el conocimiento en el fondo del negocio:

Oído el Consejo Real, vengo en declarar mal formada esta competencia, y que no há lugar á decidirla.

Dado en Palacio á 7 de Enero de 1857.—Está rubricado de la Real ma-

no. El Ministro de la Gobernación, Cándido Nocedal.

De Real orden lo digo á V. S., con devolución del expediente á que se refiere esta competencia, para su inteligencia y demás efectos. Dado en V. S. muchos años. Madrid 8 de Enero de 1857. Nocedal. Sr. Gobernador de la provincia de Pontevedra.

La Reina (Q. D. G.) se ha dignado expedir el Real decreto siguiente:

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador de la provincia de Badajoz y el Juez de primera instancia de Albuquerque, de los cuales resulta:

Que en 14 de Marzo de 1854 acordó el Juez expresado D. Pedro Llinas Tripa, vecino de Villar del Rey, diciendo que en virtud de sentencia ejecutoriada de la Audiencia territorial era dueño de los bienes de una capellanía, de que se le dió posesión judicial en 18 de Diciembre de 1845, según testimonio de diligencias que acompañaba, formando parte de los indicados bienes una suerte de tierra, que, según la fundación, debe tener 18 fanegas de sembradura, en Cabo de Gato, término de aquella villa, lindante con la tierra conocida por del Olivo, también de su propiedad, con otra tierra que se conoce por de los Mendez y baldío del pueblo, y con cierta obra pía; y añadiendo que aunque estaba en la quietud y no contradicha posesión de la finca, como al tiempo de dársele esta posesión no se deslindó con la claridad y precisión convenientes, pedía que se procediese á la declaración de sus verdaderos lindes, previa citación de los dueños limítrofes y designación de peritos.

Que habiendo accedido, el Juez libró al efecto despacho á un escribano de Villar del Rey para que, dando conocimiento al Alcalde de la comisión que le confería, pasara por sí á formalizar el acto:

Que el escribano comisionado acordó el mismo día que recibió el despacho, 21 de Marzo de 1854, darlo cumpliendo, y lo comunicó el siguiente al Alcalde, quien hizo presente por una parte que el Ayuntamiento había acordado en 19 del propio mes, en vista de una solicitud que le tenía presentada el mencionado D. Pedro Llinas para el deslinde del referido terreno, que se diese conocimiento de ella al Gobernador civil de la provincia en consideración á ser este terreno, ó parte de él, baldío de la villa; y por otra, que lo podría verificarse el deslinde hasta el otro día en atención á ser necesario el escribano para el cumplimiento de distintos despachos del Juez, de carácter urgente:

Que á pesar de ello, y en fuerza de reclamación de D. Pedro Llinas al comisionado, se verificó en la tarde del mismo día 22 el deslinde, con asistencia de peritos y de los interesados, entre estos el Regidor síndico, quien protestó el acto en el concepto de que no correspondía á la capellanía de que se trata suerte alguna de tierra en el sitio deslindado, de que este sitio llevaba otro nombre, del expresado en la fundación, y de que le había conocido repartido á terrazgo como baldío; y devuelto el despacho cumplimentado al Juez, se acordó por este el día 50 que se diese vista, como se hizo el 1.º de Abril siguiente, de la diligencia del deslinde á las personas que fueron citadas á ella, á fin de que manifestaran si estaban ó no conformes, en cuyo estado se les acusó la rebeldía, y el Ayuntamiento manifestó que antes de presentarse el Síndico en juicio esperaba resolución superior:

Que habiendo entre tanto accedido el Alcalde de Villar del Rey al Gobernador civil de la provincia, primero en 21 de Marzo, con copia del acuerdo del Ayuntamiento del día 19 en su lugar referido, para que se sirviese declarar el asunto contencioso-administrativo y poner á la Autoridad municipal á cubierto de las providencias judiciales, y luego, en 28 del mismo mes, dándole cuenta de que se había practicado el deslinde por comisión del Juzgado, y exhortándolo á que se requiriese de inhibición al Juez en el asunto, el Gobernador pidió en 5 de Abril informes separados al Juez y al Ayuntamiento sobre si el terreno que se dice baldío del comun, donde consideraba enclavado el predio de Llinas, está ó no poblado de monte, con todo lo demás conducente á la ilustración del negocio:

Que el Juez, en contestación, envió el día diez del propio Abril copia literal de la diligencia de apeo y deslinde en que no resulta que tenga la calidad de monte el terreno de que se trata, añadiendo que había sido notificado el Regidor síndico como los demás interesados para que manifestaran si se conformaban con aquel acto:

Y que el Ayuntamiento elevó el mismo día al Gobernador un nuevo acuerdo, en que dispuso que se le contestase que tanto la tierra que legítimamente corresponde á Llinas, como la que quiere que se le señale en el baldío propio del comun de vecinos, se hallan pobladas de monte, y que no niega á Llinas el número de fanegas de tierras que le fueron adjudicadas en el expresado sitio como de capellanías, pero sin poder convenir en que se le señalen donde sea:

Que el Gobernador, en tal estado, oído el Consejo provincial, requirió de inhibición al Juez en la persuasión de que tanto la tierra, cuya pertenencia no se disputaba á Llinas, como la que se había comprendido en el deslinde ó se le señalaba en el baldío, se hallan pobladas de monte:

Que el Juez oyó al Promotor fiscal y á D. Pedro Llinas, quien, combatiendo todos los fundamentos del requerimiento de inhibición, presentó testimonio de una parte de la fundación de la capellanía y de la posesión que en virtud de la ejecutoria tenía tomada y conservaba del predio deslindado, y además una información que le fué admitida previa citación del mismo Promotor y del Alcalde de Villar del Rey, en que resulta: primero, que el terreno de que se trata, adjudicado en su día á Llinas en virtud de ejecutoria, no contiene arbolado de ninguna clase excepto tres ó cuatro chaparros; segundo, que el arbolado inmediato es de la pertenencia de un particular: tercero, que lindando con la tierra de Llinas, no hay arbolado del comun de vecinos; y cuarto, que la suerte conocida por de los Mendez, linde de la que es objeto de la cuestión, se ha dado á terrazgo en algunas ocasiones como de baldío, y hoy se conoce por de propiedad particular, obteniéndola sus dueños por título de sucesión:

Que el Juez, considerando que la cuestión de deslinde, sin ser administrativa en el caso actual, tomaba el carácter de cuestión de propiedad, resistió el requerimiento de inhibición; y que, por último, el Gobernador, oído al Consejo provincial, sostuvo definitivamente esta competencia:

Visto el art. 1.º de las ordenanzas de montes de 22 de Diciembre de 1853, según el cual, bajo la denominación de montes para los efectos de las mismas, se comprenden todos los terrenos cubiertos de árboles á propósito para la construcción naval ó civil, carbaneo, combustible y demás necesidades comunes, ya sean montes altos, bajos, boques, solos, plantíos, matorrales, de la

da especie distinta de los olivares frutales ó semejantes plantaciones de especial fruto ó cultivo agrario:

Visto el art. 8.º, párrafo sétimo de la ley de 2 de Abril de 1845, que atribuye al conocimiento de los Consejos provinciales las cuestiones contenciosas relativas al deslinde y amojonamiento de los montes que pertenecen al Estado, á los pueblos ó á los establecimientos públicos; reservando las cuestiones sobre la propiedad á los Tribunales competentes:

Visto el art. 74, párrafo segundo de la ley de 8 de Enero de 1845, en que se expresa que corresponde al Alcalde, como administrador del pueblo, y bajo la vigilancia de la Administración superior, procurar la conservación de las fincas pertenecientes al comun:

Considerando:

1.º Que con arreglo al artículo citado de la ley de 2 de Abril de 1845, solo podría corresponder á la Administración el conocimiento de la cuestión de deslinde sobre que versa esta competencia, si afectase á montes del Estado, del comun ó de establecimientos públicos:

2.º Que, por tanto, no siendo, como no es, del comun de vecinos de Villar del Rey, el arbolado inmediato al predio objeto del deslinde, y resultando, por el contrario, que ni este predio ni el baldío del pueblo, que realmente linda por otra parte con el mismo predio, tienen el requisito esencial que exige el art. 1.º de las Ordenanzas también citadas, de estar cubiertos de árboles para merecer legalmente la denominación de monte, carece de atribuciones la Administración, en el caso actual respecto á la cuestión de límites:

3.º Que las cuestiones de pertenencia que además se suscitan por la Autoridad municipal, solo deben ventilarse en los Tribunales de justicia, tratándose de un predio sobre el cual no podrían de modo alguno ejercerse las facultades que consigna á los Alcaldes el artículo asimismo citado de la ley de 8 de Enero de 1845, por haber sido adjudicada en virtud de ejecutoria al particular que le viene poseyendo tranquilamente desde 1845:

Oído el Consejo Real, vengo en decidir esta competencia á favor de la Autoridad judicial.

Dado en Palacio á 7 de Enero de 1857.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de Gobernación, Cándido Nocedal.

De Real orden lo comunico á V. E., con devolución del expediente y autos á que se refiere esta competencia, para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de Enero de 1857.—Cándido Nocedal.—Sr. Ministro de Gracia y Justicia.

Los que se insertan en el Boletín Oficial para conocimiento del público. Orense 26 de Enero de 1856.—El Gobernador, Pablo de Uria.

REGLAMENTO

PARA LA EJECUCION DEL DECRETO DE 7 DE ABRIL DE 1845, SOBRE CONSERVACION Y MEJORA DE LOS CAMINOS VECINALES.

(Continuación.)

Art. 149. Cuando la subasta deba recaer sobre todos los trabajos de caminos vecinales que hayan de ejecutarse en toda la provincia ó en varios distritos, así como en el caso prevenido en el párrafo segundo del art. 107, se hará ante el jefe político, con asistencia de dos consejeros provinciales y del ingeniero de la provincia.

Quando dicha subasta recaiga sobre

las obras de un partido judicial, y en el supuesto de que el presupuesto de cada lote no exceda de 20,000 rs., se verificará ante el jefe civil, si residiere en él, ó ante el alcalde de la capital del partido, si lo creyere conveniente el jefe político, con asistencia de un concejal de cada uno de los pueblos interesados en el camino.

Estos individuos serán nombrados por sus respectivos ayuntamientos.

Art. 141. Las adjudicaciones se harán por líneas vecinales, ó por trozos de cada línea, según lo exija la importancia de los trabajos.

Art. 142. Las subastas se anunciarán con la anticipación conveniente por el Boletín oficial, y por carteles que los Alcaldes harán fijar en sus pueblos respectivos.

SECCION QUINTA.

Vigilancia y recepcion de los trabajos.

Art. 143. Los trabajos que se ejecuten por empresas serán vigilados por la persona facultativa nombrada al efecto por el jefe político.

Art. 144. Las medidas coercitivas prescritas para los caminos de segundo orden, en los casos en que los empresarios falten á las condiciones de sus contratos, son aplicables á casos iguales ocurridos respecto á obras de los caminos de primer orden, con la diferencia de ser aquí el jefe político, en vez del alcalde, la parte actora contra los empresarios.

Art. 145. La recepcion de los trabajos se hará por la persona facultativa que nombrare el jefe político, y á presencia del empresario ó su apoderado.

El acta de recepcion se firmará por el que entregue y el que reciba, expresando en ella si hay conformidad, ó las observaciones que se les ofrezcan.

Estas actas se someterán á la aprobación del jefe político.

Art. 146. El pago á los empresarios se hará por libramientos del jefe político, con sujeción á las reglas establecidas para los trabajos de las carreteras provinciales.

Art. 147. Luego que un camino vecinal de primer orden esté concluido y puesto en buen estado de tránsito, podrán nombrarse para su conservación y guarda peones camineros que estarán bajo la inspeccion inmediata de los Alcaldes de los pueblos en que radique la parte de camino puesta á su cuidado.

Art. 148. Estos peones se nombrarán por el jefe político á petición de los ayuntamientos, y después que estas corporaciones hayan acordado el jornal que ha de abonárseles.

SECCION SEXTA.

Libramientos y justificacion de gastos.

Art. 149. Todos los gastos relativos á caminos vecinales de primer orden se ejecutarán en virtud de libramiento del jefe político contra el depositario de los fondos provinciales.

Art. 150. Las cuentas de los ingresos y gastos de estos caminos se formarán y justificarán del mismo modo que las de los ingresos y gastos de los caminos provinciales, y necesitarán igual aprobación que estas.

Art. 151. El resumen de las cuentas de cada camino vecinal de primer orden, después de aprobado se imprimirá y se dirigirá á los Alcaldes de los pueblos interesados en dicho camino, para que hagan del resumen citado el uso prescrito en el art. 115 del reglamento formado para la ejecución de la ley sobre organización y atribuciones de los ayuntamientos.

CAPITULO IX.

DE LAS COMISIONES INSPECTORAS DE LOS CAMINOS VECINALES.

Art. 152. Los jefes políticos podrán formar, ya para cada camino vecinal de

primer orden, ya para todos los caminos vecinales de un partido, juntas de inspección y vigilancia, compuestas de diputados provinciales, patrones, alcaldes, propietarios, comerciantes y demás personas interesadas en el buen estado de las comunicaciones.

Art. 153. Si un camino tuviere demasiada extensión para ser inspeccionado y vigilado fácilmente por una sola junta, podrá dividirse en dos partes que se confiarán á dos juntas distintas.

Art. 154. Cada junta nombrará su presidente y secretario, y determinará el sitio habitual de sus reuniones.

Art. 155. Cuando el jefe político asista á la junta establecida en la capital de la provincia, tendrá la presidencia, y lo mismo sucederá con el jefe civil respecto á la de su distrito.

Art. 156. Estas comisiones darán su dictamen á invitación del jefe político sobre los proyectos redactados para trabajos nuevos y otros de fábrica ó de cualquiera otra especie.

Podrán ser consultadas, cuando no hubiere avenencia entre los alcaldes, acerca de las cuotas que deben señalarse á los pueblos interesados en un camino de primer orden.

Vigilarán á los peones camineros, y darán noticia al jefe político de los que no cumplan con sus deberes.

Designarán uno ó varios de los individuos de su seno para que asistan á la recepción de obras ejecutadas por empresa, así como á la de materiales suministrados por empresarios, ó por medio de prebendados. Los encargados de la recepción avisarán de antemano á los delegados de la junta el día y hora en que aquella ha de tener lugar: harán mención en el acta de las observaciones de estos delegados y los invitarán á firmarla.

Si los comisionados de la junta, debidamente citados no acudieren al acto de la recepción, la verificará el encargado de ella, sin que sea obstáculo la ausencia de aquellos.

Art. 157. Las juntas inspectoras se reunirán en los tres primeros meses del año para redactar sus observaciones sobre el estado de los caminos y acerca de las mejoras más urgentes que deban hacerse en ellos. Estas observaciones se dirigirán al jefe político.

En esta primera sesión designarán las juntas los individuos de su seno encargados especialmente de cuidar de la buena construcción de las obras y de asistir á su recepción. Estos encargados podrán ponerse en relación directa con el jefe político y con la persona nombrada para la dirección y vigilancia inmediata de los trabajos, á fin de poder indicar más prontamente los defectos de construcción ó de cualquiera otra especie que notaren, así como las mejoras que creyeran posible. Sin embargo, los delegados de las juntas no podrán hacer por sí ninguna modificación en los proyectos redactados, ni dar á los encargados de su ejecución ninguna orden directa.

Art. 158. Las juntas inspectoras procurarán ilustrar á los pueblos, haciéndoles conocer la utilidad que ha de resultar de mejorar sus comunicaciones; excitarán el celo de los ayuntamientos para que se presenten á contribuir á tan importante mejora; despertarán en cuantos puedan el espíritu de asociación entre los pueblos, que es el que puede proporcionar con más prontitud la mejora de los caminos de primer orden; promoverán la realización de suscripciones en dinero ó en prestaciones personales; tratarán de obtener la cesión gratuita de los terrenos y materiales necesarios para el establecimiento y conservación de los caminos vecinales; se valdrán de su influencia para vencer los obstáculos á que puedan dar lugar el trazado de los caminos, su conservación y la ejecución de los trabajos, y finalmente emplearán cuantos recursos les dicte su amor al bien público, pa-

ra que se lleve á cabo una idea tan benéfica para la agricultura y para los pueblos en general.

Los jefes políticos harán presente al Gobierno los esfuerzos de estas juntas y los resultados que dieren, para que se tenga en cuenta el mérito que contraigan los individuos que las forman.

CAPITULO X.

CONSTRUCCION DE NUEVOS CAMINOS Y VARIACION DE DIRECCION Y ENSANCHE DE LOS EXISTENTES.

SECCION PRIMERA.

Construcción de nuevos caminos.

Art. 159. No se procederá á la construcción de caminos vecinales de primero ó segundo orden, sino á petición de los ayuntamientos interesados, y con la aprobación del jefe político.

Para que esta autoridad conceda el permiso de abrir nuevos caminos, es necesario que lo exijan las necesidades de la circulación, y que le conste además que los peticionarios tienen los recursos necesarios para llevar á cabo la obra, y la posibilidad de realizarlos.

Art. 160. En el caso de haberse de construir un camino nuevo, y de no querer los dueños de los terrenos que haya de atravesar cederlos gratuitamente en beneficio del pueblo, se tratará de adquirir estos terrenos por vía de convenio.

A este fin concertará el alcalde con los propietarios las condiciones de la adquisición, las someterá á la aprobación del ayuntamiento; y si este y el jefe político después las aprueban, se verificará la compra del terreno.

Si no hubiere avenencia entre el alcalde y el propietario, se procederá con sujeción á la ley de 17 de abril de 1836.

SECCION SEGUNDA.

Variación de dirección y ensanche de los caminos existentes.

Art. 161. Para variar la dirección de un camino ya existente, se necesita igualmente la petición del ayuntamiento interesado y la autorización del jefe político, siempre que el nuevo trozo que resulte exceda de media legua. En otro caso se considerará esta obra como otra cualquiera de las comunes que hayan de ejecutarse en los caminos vecinales, y se sujetará á las mismas reglas y formalidades.

Art. 162. La adquisición de los terrenos que haya de ocupar el nuevo trozo se verificará del mismo modo que los necesarios para un camino de nueva construcción; pero si el dueño del terreno adquirido lo fuere también del colindante con el trozo abandonado, se procurará hacer la adquisición por vía de cambio.

Art. 163. El terreno necesario para dar á un camino la anchura que se le haya fijado en la orden de clasificación, se tomará por partes iguales de los terrenos adyacentes, siempre que el de uno y otro lado sean de propiedad particular.

Si el camino linda por uno de sus bordes con propiedades particulares, y por el otro con terrenos baldíos, realengos ó del común, se tomará de estos últimos la parte precisa para ensanchar el camino.

Se exceptúan sin embargo los casos en que los obstáculos naturales ó las circunstancias locales se opongan á la observancia de las reglas anteriores; y también aquellos en que el terreno colindante por un lado con el camino esté cercado ó de plantío, y por el otro expedido, pues entonces se ensanchará siempre el camino por el costado libre y que ofrezca menos dificultades de ejecución.

CAPITULO XI.

DISPOSICIONES PARA LA POLICIA Y CONSERVACION DE LOS CAMINOS VECINALES.

SECCION PRIMERA.

Medidas de Conservación.

Art. 164. Siempre que los caminos vecinales de primero ó segundo orden estén construidos al piso natural ó en desmonte tendrán cunetas á los costados que harán parte integrante de ellos.

La anchura y profundidad de estas cunetas serán proporcionadas á la necesidad de dar salida á las aguas que puedan perjudicar al camino; no obstante, el minimum de sus dimensiones será de dos pies de anchura en la parte superior, pié y medio en el fondo, y dos pies de profundidad.

Art. 165. Las cunetas construidas á lo largo de los caminos vecinales se limpiarán á lo menos una vez todos los años, y más á menudo si lo exigieren las circunstancias. La limpia se ejecutará por orden y bajola dirección, del Alcalde, y se pagará de los fondos destinados á caminos vecinales. El cieno, polvo y demás materias extraídas de las cunetas, no podrán echarse sobre el camino.

Art. 166. No será lícito hacer represas pozos ó abrevaderos á las bocas de los puentes y alcantarillas, ni á los márgenes de los caminos, á menor distancia que la de treinta varas de estos. Los contraventores incurrirán en la multa de cincuenta á doscientos reales, además de subsanar el perjuicio causado.

Art. 167. Los cultivadores de las heredades lindantes con el camino, que con el plantío y labores de las mismas ocasionen daño á los muros de sostenimiento, aletas de alcantarillas, estribos de puentes, y á cualesquiera otras obras del camino, ó que labren en las escarpas de este, incurrirán en la multa que señala el artículo anterior.

Art. 168. Los labradores que al tiempo de cultivar las heredades inmediatas á los caminos, y los pastores y ganaderos que con sus ganados dejaren caer en los paseos y cunetas de aquellos tierra ó cualquiera cosa que impida el libre curso de las aguas, estarán obligados á su limpia ó reparación.

Art. 169. Los dueños de las heredades lindantes con los caminos no podrán impedir el libre curso de las aguas que proviniere de aquellos, haciendo zanjaz, calzadas, ó levantando el terreno de dichas heredades.

Art. 170. Los dueños de heredades confluantes con los caminos, y en posición costanera ó pendiente sobre estos, no podrán cortar los árboles en las treinta varas de distancia de las carreteras, sin licencia de la autoridad local, precedido reconocimiento del ingeniero encargado de la misma; y en manera alguna arrancar las raíces de los mismos para impedir que las aguas lleven tierra al camino, ó caigan trozos de terreno; y si contravinieren serán obligados a costear la obra necesaria para evitar semejantes daños.

Art. 171. Cualquiera pasajero que con un carruaje rompiere ó arrancare algún guarda rueda del camino, pagará cuarenta reales por subsanación del perjuicio, y además de cincuenta á cien reales si hubiere procedido contraviniendo á las reglas establecidas en este capítulo.

Art. 172. Los carruajes de cualquiera clase deberán marchar al paso de las caballerías en todos los puentes, sean estos de la clase que fueren, y no podrán dar vuelta entre las barandillas ó antepechos de estos. Los que contravinieren incurrirán en la multa de cincuenta á cien reales, además de pagar el daño que de este modo hubieren causado.

Art. 173. Los conductores que abrieren surcos en los caminos, sus paseos ó márgenes, para meter las ruedas de los

carruajes ó cargarlos más cómodamente, sufrirán la multa de cincuenta á cien reales, y repararán el daño causado.

Art. 174. Ningún carruaje ni caballería podrá marchar por fuera del firme ó calzada del camino, ó sea por sus paseos, y su dueño ó conductor, si lo hiciere, pagará de cincuenta á cien reales por cada carruaje, y cuatro por cada caballería.

Art. 175. Cuando en los caminos se hicieren recargos ó cualesquiera obras de reparación, los carruajes y caballerías deberán marchar por el paraje que se demarcare al efecto; y los contraventores serán responsables del daño que causaren.

Art. 176. Los dueños ó conductores de los carruajes, caballerías ó ganados que cruzaren el camino por parajes distintos de los destinados á este fin, ó que han servido siempre para ir de unos pueblos á otros, ó para entrar y salir de las heredades limítrofes, pagarán el daño que hubieren causado en los paseos, cunetas y márgenes del camino, además de la multa de sesenta reales.

Art. 177. El que rompa ó de cualquier modo cause daño en los guardaruedas, antepechos ó sus albardillas, ó sea otras obras de los caminos, así como en las pirámides ó partes que señalan las leguas, ó borre las inscripciones de estas, ó maltrate las fuentes y abrevaderos construidos en la vía pública, ó los árboles plantados á las márgenes de los caminos, ó permita que lo hagan sus caballerías y ganados, pagará el perjuicio y una multa de veinte á cien reales; y al que robare los materiales acopiados para las obras, ó cualquier efecto perteneciente á estas, se le asegurará para que se le castigue con arreglo á las leyes.

Art. 178. Se prohíbe barrer, recoger basura, rascar tierra ó tomarla en el camino, sus paseos, cunetas y escarpes, pena de veinte á cincuenta reales de multa y reparación del daño causado; pero los encargados de caminos podrán permitir la extracción del barro ó basura de ellos, prescribiendo las reglas que al efecto crean oportunas.

Art. 179. Se prohíbe todo arrastre de maderas, ramajes ó arados en los caminos, y lo mismo el atar las ruedas de los carruajes, bajo la multa de cuatro reales por cada madero, ocho si fuere arado que lleve al extremo chapa ó clavo de hierro, y sesenta por cada carruaje que lleve rueda atada, además de reparar el daño causado.

SECCION SEGUNDA.

Del tránsito de los caminos vecinales.

Art. 180. Los alcaldes cuidarán en sus respectivos términos jurisdiccionales que el camino y sus márgenes estén libres y desembarazados, sin permitir estorbo alguno que obstruya el tránsito público.

Art. 181. No podrán los particulares hacer acopio de materiales, tierras, alnos y estiércoles, amontonar frutos, mieses, ó otra cualquiera cosa sobre el camino, sus paseos y cunetas; ni colgar ó tender ropas en los mencionados parajes. A los que contravinieren á lo dispuesto en este artículo, se impondrá una multa de veinticinco á treinta reales por la primera vez, y doble por la segunda.

Art. 182. Las pajas, zarzas, materiales y todo género de ramaje que sirva de resguardo ó de cerca á los campos y heredades lindantes con el camino, deberán estar bien cortados y de modo que no salgan al mismo.

Art. 183. Los arrieros y conductores de carruajes que hicieren suelta y den de comer á sus ganados en el camino ó sus paseos, sufrirán la multa de veinte reales por cada carruaje, y de cuatro reales por cada caballería ó cabeza de ganado, además de pagar cualquier perjuicio que causaren.

Art. 104. La pona establecida en el artículo anterior es aplicable á los dueños y pastores de cualquier ganado, aunque sea mestizo, que estuviere pastando en las alamedas, prados, cunetas y escarpes del camino.

Art. 105. En el camino, sus paseos y márgenes, ninguno podrá poner tinglados ó puestos ambulantes, aunque sean para la venta de comestibles, sin la licencia correspondiente.

Art. 106. Delante de las posadas ni en otro paraje alguno del camino podrá dejarse ningún carruaje suelto, y el dueño ó conductor del que así se encontrare, se le impondrá una multa de veinte á cincuenta reales. En igual pena incurrirá toda persona que eche animales muertos sobre el camino ó á menor distancia de treinta varas de sus márgenes, además de tener la obligación de sacarlos fuera.

Art. 107. Las caballerías, recuas, ganados y carruajes de toda especie, deberán dejar libre la mitad del camino á la ancha para no embarazar el tránsito á los demás de su especie: y al encontrarse en un puesto los que van y vienen, marcharán arriándose cada uno á su respectivo lado derecho.

Art. 108. A los arrieros que llevando mas de dos caballerías reatadas caminaren perrados, se les multará en veinte reales de vellón á cada uno; y si fuesen carruajes los que así caminaren, se exigirá igual cantidad por cada uno.

Art. 109. Cuando en cualquier paraje del camino las recuas y carruajes se encontraren con los conductores de la correspondencia pública, deberán dejar á estos el paso expedito; las contravenciones voluntarias de la presente disposición se castigarán con una multa de veinte á cincuenta reales.

Art. 110. Bajo la multa establecida en el artículo anterior, á ninguno será permitido correr á escape en el camino, ni llevar de este modo caballerías, ganados y carruajes á la inmediación de otros de su especie ó de las personas que van á pie.

Art. 111. Igual multa se aplicará á los arrieros y conductores cuyas recuas, ganados y carruajes vayan por el camino sin guía ó persona que los conduzca.

Art. 112. En las noches oscuras, los carruajes que vayan á la ligera, sin excepción alguna, deberán llevar en su frente un farol encendido, imponiéndose la multa de treinta reales á los conductores por cada vez que contravengan á esta prevención.

SECCION TERCERA.

De las obras contiguas á los caminos.

Art. 113. En las fachadas de las casas contiguas al camino no podrá ejercitarse ni poner cosa alguna que cause riesgo ó peligro á los pasajeros ó á las caballerías y carruajes. Los alcaldes, cuando reciban denuncias por dichas causas, señalarán un breve término para que se quiten los estorvos, imponiendo una multa de veinte á ochenta reales al que no lo hiciere en el tiempo señalado. (Se continuará.)

CUARTA SECCION.

ADMINISTRACION PRINCIPAL DE HACIENDA PÚBLICA

de la provincia de Orense.

Contribucion industrial y de comercio.

La Direccion general de contribuciones en circular de 16 del mes actual me dice lo siguiente:

El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda con fecha 11 del corriente ha comunicado á esta Direccion general la Real orden que sigue:—Ilmo. Sr.: He dado

cuenta á la Reina (q. D. g.) del expediente consultado por esa Direccion general, acerca de la reclamacion promovida por varios fabricantes de curtidos en solicitud de que se modifique el señalamiento hecho en Real orden de 5 de Noviembre de 1855 á las pieles de ganado vacuno y caballar, que puedan contener los noques ó pilas en que reciben la materia curtiente, respecto á lo gravoso que es aquel impuesto para el desarrollo de esta industria. En su vista y considerando que la reforma que se hizo por la citada Real orden á lo dispuesto en la tarifa núm. 5.ª del Real decreto de 20 de Octubre de 1852, está justificada en su exención; que esto no obstante el señalamiento de dos reales en cada piel de ganado vacuno ó caballar, no está proporcionado á los valores de las mismas pieles; y atendiendo á la conveniencia de procurar el fomento de esta industria nacional; S. M. conformándose con lo propuesto por V. S. se ha servido mandar que se reduzca á un real cincuenta céntimos el impuesto de dos reales por cada piel de ganado vacuno ó caballar que puedan contener los noques ó pilas en que se recibe la materia curtiente hecho por Real orden de 5 de Noviembre de 1855; y que esta rebaja tenga efecto desde 1.º del corriente, satisfaciéndose en los mismos términos y condiciones en que actualmente se verifica. La Direccion lo traslada á V. S. para su inteligencia y cumplimiento.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, y que las autoridades municipales encargadas de la formacion de materiales, se sujeten estrictamente á señalar la cantidad que cada fabrica deba satisfacer por las pieles vacunas y caballares que reciban los noques con la materia curtiente. Orense 26 de Enero de 1857.—Antonio Sierra.

IDEM.

CONSUMOS.

La Direccion general de Contribuciones me dice en 22 del corriente lo siguiente:

Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Direccion general con fecha 17 del corriente la Real orden que sigue:—Ilmo. Sr.: La Reina (q. D. g.) en vista de lo espuesto por esa Direccion general y conformándose con su dictámen ha tenido á bien determinar que quede libre de pagar derechos de consumos el carbon de piedra ó mineral, siempre que se le emplee en fabricas ó establecimientos industriales pero bajo el concepto de que habrá de satisfacerlos de la misma manera que el vegetal cuando sea destinado á usos domésticos. De Real orden lo comunico á V. S. para los efectos correspondientes. Lo que traslado á V. S. para su conocimiento é inteligencia; advirtiéndole haga las anotaciones correspondientes en todos los ejemplares que se le han remitido de la tarifa núm. 2.ª de la contribucion de consumos.

Lo que hago público y notorio por medio del Boletín oficial de la provincia para conocimiento de los fabricantes ó industriales á quienes alcanza esta gracia. Orense 27 de Enero de 1857.—Antonio Sierra.

SEPTIMA SECCION.

Juzgado de primera instancia de Orense.

El Dr. D. Venancio Moreno, Juez de primera instancia en comision de la ciudad de Orense y su partido.

Hago notorio: que en causa criminal que en este juzgado y escribania del

que refrenda, se suscriba, por robo ejecutado en gavilla, el Sr. Adad de S. Salvador de Preguero, D. Juan Perez Pinal; he acordado insertar en el periódico oficial de la provincia los efectos robados al mismo, cuyos se señalan á continuacion, á fin de que siendo habidos los remitan con las personas en cuyo poder se hallen á este juzgado; y á que tenga efecto se espide el presente, por el cual, exhorto y requiero á todos los Alcaldes constitucionales, individuos del cuerpo de la Guardia civil, vigilancia pública y mas dependientes de justicia procuren la averiguacion y captura de dichos efectos, pues en hacerlo así administrarán cumplida justicia.

Dado en la ciudad de Orense á 25 de Enero de 1857.—Venancio Moreno. Por su mandado, Pedro Antonio Cervino.

Efectos robados.

Una capa paño azul con bandas de terciopelo negro; una percion de servilletas marcadas con las iniciales del nombre y apellido del robado; sábanas de lienzo y estopilla del mismo modo marcadas; algunas fundas de las de primera clase; un gabán color avellana de medio uso; una maestra de bolsillo fabrica inglesa con caja de plata; y una carabina de piston, alguna pólvora de caza y porcion de longaniza.

IDEM.

D. Juan Garcia Armero, Alcalde constitucional de la ciudad de Orense con funciones de juez de primera instancia en este asunto por incompatibilidad del que regenta el juzgado.

Hago notorio: que en este tribunal y escribania del infrascrito pende expediente pago de costas de la causa suscitada contra D. Antonio de Novoa del Olibar de Puga en el distrito de Toen por daños causados á su convecino Juan Alvarez; en el cual por no haber satisfecho las penas pecuniarias de su responsabilidad fueron secuestradas y tasadas las rentas que percibe en dicha Parroquia de Puga, que á continuacion se espresan.

	Rs.
Sesenta y cuatro ollas de vino tinto ó sean ocho moyos que paga el Cabezalero Domingo Santomé por el foral da Cerba su valor.....	2560
Seis moyos de vino tinto que paga D. José Villamarín por el foral titulado da Amenda, su valor mil novecientos veinte rs.....	1920
Tres moyos y tres ollas de vino tinto que paga Pedro Rodríguez por el foral titulado Barrelar y Cortello, su valor mil y ochenta rs.....	1080
Seis ollas de vino tinto que paga D. Manuel Nieto por el foral titulado de Vales y Cortina, en doscientos cuarenta rs.....	240
Seis ollas de vino tinto que paga Ambrosio de Novoa por el foral nombrado Arxivineiro y Rial, su valor doscientos cuarenta rs.....	240
Cuatro moyos y una olla de vino tinto que paga Antonio Otero y consorces por el foral titulado da Pereira, en mil trescientos veinte rs.....	1320
Un moyo de vino tinto que paga José Bello y Camilo Ro-	

mero por el foral nombrado Raul, su valor trescientos veinte rs.....	320
Seis ollas de vino tinto que paga José Carneiro por el foral titulado de Posaras, en doscientos cuarenta rs.....	240
Tres moyos y tres ollas de vino tinto que paga Antonio González por el foral titulado do Arxivineiro, su valor mil y ochenta rs.....	1030
Dos moyos de vino que paga D. Andrés Gayoso, su valor seiscientos cuarenta.....	640
Tres moyos de vino tinto que paga Rosendo Ojea, tasados en novecientos sesenta rs.....	960
Dos ollas de vino blanco que paga Gregorio Blanco, su valor sesenta rs.....	60
Tres moyos y tres ollas de vino tinto que paga Ramon Ojea su valor mil ochenta rs.....	1080

Cuyas rentas ó de ellas las necesarias para satisfacer dichas penas y costas posteriormente devengadas, se ponen en pública subasta, á fin de que las personas que les interese su adquisicion concurren á hacer sus posturas á la escribania del infrascrito que les serán admitidas hasta el dia 5 del entrante mes de Febrero, en el que y hora de doce á una se celebrará remate ante mi autoridad en favor del mas ventajoso licitador. Dado en Orense á 23 de Enero de 1857.—Juan G. Armero. Por mandado del Sr. Juez interino, Manuel Casar.

IDEM de Ganzo de Limia.

En la villa de Ganzo de Limia á veinte y uno de Enero de mil ochocientos cincuenta y siete el Sr. Licenciado D. Gerardo Morenza, juez de paz de la misma, vista el acta de juicio verbal habida á instancia de D. José Oterino del comercio de la misma, demandante y en rebeldia de D. Antonio Parada Biempica de Canade, demandado por trescientos veinte y un rs. en metálico y diez ferrados de trigo en especie, dijo: considerando que el demandante justificó plenamente los extremos de su petición con las dos obligaciones que á su favor hizo el demandado, las que no se unieron á esta acta, por estar insertas en dos libros de mas de cien hojas cada uno; que debia condenar y condena á D. Antonio Parada, á que con las costas pague al demandante los trescientos veinte y un rs. y los diez ferrados de trigo en especie, ó su importe en metálico al precio corriente del mercado de esta villa, mandando que esta providencia se notifique en los estrados de este juzgado de paz y se haga notoria por edictos en conformidad á lo prescrito en el art. 1.185, de la ley de enjuiciamiento civil, y se publique en el Boletín de la provincia. Así lo previó, determinó y firma dicho señor de que yo el secretario certifico.—Gerardo Morenza.—Rafael de la Torre, secretario.

Y para cumplimentar lo dispuesto en el artículo 1.199 de la ley, firmo la presente. Ganzo de Limia Enero 23 de 1857.—Gerardo Morenza.—Rafael de la Torre, Secretario.

ORENSE.—1857.

IMPRESA DE D. PEDRO LOZANO.